

# Del pluralismo indígena al extractivismo centralizado

Cómo las prerrogativas estatales reformaron  
el enfoque territorial de Bolivia plurinacional

*Carwil Bjork-James*

■ Doi: 10.54871/ca24as26

## **Introducción**

En 2010, el presidente Evo Morales se dirigió a veinte mil activistas reunidos en Tiquipaya, Bolivia, para la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. El presidente denunció que “el capitalismo secuestra a la Madre Tierra para saquear sus recursos, para explotar a sus hijos e hijas, para envenenar sus ríos y lagos” y concluyó que “por eso no se puede vender la tierra”. Durante el primer mandato de Morales, los diplomáticos bolivianos y los redactores de la nueva constitución del país propusieron cambios audaces en las relaciones Estado-pueblos indígenas y economía-medioambiente. El partido del presidente, el Movimiento al Socialismo [MAS-IPSP], asumió las demandas del movimiento indígena por la autonomía territorial indígena como parte de su agenda e incluyó el concepto posdesarrollista del Vivir Bien como un principio constitucional (Ranta, 2016). El MAS apuntaló la aprobación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

en 2007. Poco después, Bolivia instituyó que las disposiciones de la UNDRIP fueran parte de su legislación interna.<sup>1</sup> Los diplomáticos bolivianos introdujeron el concepto andino de Pachamama, el planeta como un ser vivo, en la diplomacia internacional (Permanent Forum on Indigenous Issues, 2010) y en Tiquipaya pusieron a la Madre Tierra en el centro del escenario del ambientalismo internacional.

Los académicos estábamos ansiosos por reconocer las rupturas que implicaban los autoproclamados “Estados plurinacionales” de Bolivia y Ecuador. Sarah Radcliffe observó en la Constitución de 2008 “la transformación radical del desarrollo ecuatoriano” (Radcliffe, 2012, p. 241). Miguel Centellas vio en la constitución boliviana de 2009 una “descentralización radical” de la gobernabilidad: “al acelerar el proceso de descentralización, Morales ha creado un complejo sistema de autonomías que seguramente dificultará aún más la gobernabilidad nacional” (Centellas, 2010, p. 38).

En retrospectiva, estas declaraciones son difíciles de creer. Justo cuando se renombró al Estado como “plurinacional”, el Gobierno se apartó del radicalismo etnoecológico<sup>2</sup> que antes abrazaba. En cambio, siguió un modelo económico extractivo-redistributivo basado en la exportación de materias primas, que ha llevado a nuevas intromisiones en los territorios indígenas a los que Morales había prometido mayor autonomía (Bjork-James, 2020a). En julio de 2011, el presidente lamentó públicamente que los indígenas “están siendo confundidos” por las ONG extranjeras cuando rechazan proyectos extractivos como carreteras, represas hidroeléctricas y pozos petroleros (*La Razón*, 2011). Incluso dijo “No son mis hermanos indígenas, [los] que se oponen a la exploración del petróleo o del gas o finalmente a la ejecución de la construcción de caminos” (*Erbol Digital*, 2011). Morales abordaba la polémica por el proyecto vial

<sup>1</sup> Bolivia: Ley N.º 3760, 7 de noviembre de 2007. <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-3760.html>

<sup>2</sup> Como denomina Muehlebach (2001) a la postura ética que combina los derechos indígenas y la protección ambiental.

Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore [TIPNIS], que se convirtió en el ejemplo más visible de los límites del compromiso del Gobierno con los derechos ambientales e indígenas.

En 2019, incendios devastadores asolaron aproximadamente 6,4 millones de hectáreas de las tierras bajas de Bolivia, destruyendo extensas superficies de bosque primario y secundario. Si bien fueron provocados por la práctica anual de chaqueo en las tierras bajas agrícolas, los incendios fueron favorecidos por las condiciones climáticas y se descontrolaron durante meses. Una marcha indígena en septiembre denunció leyes y decretos que despenalizaban la deforestación ilegal y ofrecían títulos a pequeños y grandes terratenientes sobre tierras despejadas (Corz, 2019). Al afectar desproporcionadamente al departamento oriental de Santa Cruz, los incendios también se convirtieron en foco de la oposición política de la derecha. Apenas dieciséis días antes de las elecciones más reñidas en dos décadas, cerca de un millón de cruceños se reunieron en un cabildo “por la democracia y la tierra”, donde los oradores denunciaron al Gobierno y a los colonos agrarios (indígenas de las tierras altas), a quienes culparon de los incendios. En un poema orante dirigido a la propia Santa Cruz, Andrea Vaca Barbery denunció que “El verde de tus bosques y el blanco de tu espíritu han sido mancillados por mano criminal que ambicionaron tus tierras, quieren quitarte el suelo para sembrar la muerte” (*Realidad viral*, 2019). Cabildos similares se llevaron a cabo en La Paz Potosí y Cochabamba,<sup>3</sup> y fueron el preludio de tres semanas de protestas centradas, más que en el daño ecológico, en el presunto fraude electoral y, en última instancia, en la destitución del presidente el 10 de noviembre. Durante su último mes de Gobierno, los opositores tildaron a Morales de destructor del medioambiente.

<sup>3</sup> En el Cabildo de Cochabamba se pidió que Morales fuera juzgado por destrucción del medioambiente.

En este capítulo, tomo la controversia del TIPNIS y los incendios de 2019 como puntos de partida para comprender la visión territorial del Estado boliviano según Evo Morales, el presidente con más años de servicio en la historia del Estado de Bolivia. La controversia del TIPNIS obligó al Gobierno, que se autodescribía como plurinacional, descolonizador y descentralizador (Mamani Ramírez, 2017), a declarar abiertamente su oposición al control indígena local de las decisiones de desarrollo. Los funcionarios del Gobierno también han hablado extensamente sobre su visión territorial de Bolivia como impulsor del proyecto de la carretera TIPNIS. Una vez iniciado el conflicto, el Gobierno pasó retóricamente de un nacionalismo boliviano pluralista a uno unitario y propuso una visión desarrollista que enfatiza la “integración” y la conexión vertebral del territorio boliviano en el que todas las regiones están disponibles como fuentes de recursos y vinculadas a circuitos de servicios estatales. La agenda de desarrollo 2025 del Gobierno de Morales, Agenda Patriótica (publicada en 2013), aplicó esta visión sistemáticamente, proponiendo inversiones masivas en infraestructura energética y de transporte y una expansión histórica del cultivo agrícola.

La primera mitad de este capítulo describe las raíces del conflicto ético y práctico dentro de la izquierda plurinacional. Argumento que el problema del extractivismo en el Gobierno de Evo Morales no es solo un esfuerzo para financiar programas redistributivos. Identifico un conflicto dentro de la coalición MAS-IPSP entre la visión descentralizadora propuesta por el movimiento indígena transnacional y otra visión centralizada guiada por los imperativos estatales. Los territorios Isiboro-Sécure y Ñembi Guasa reflejan la primera visión y cómo se han convertido en terrenos de conflicto.

En la segunda parte del texto, exploro la visión unitaria y extractivista del Gobierno a través de un examen minucioso de sus declaraciones y acciones con respecto al TIPNIS, su agenda de desarrollo 2025 y los controvertidos cambios legales que se han relacionado con los incendios de 2019. El material que presento

aquí lo recopilé a través de medios documentales, basándome en declaraciones públicas de actores clave, informes sobre los proyectos publicados por el Gobierno, réplicas del movimiento indígena a los proyectos, artículos de prensa, así como entrevistas y grabaciones de discursos oficiales y presentaciones. Sitúo las políticas extractivas en relación con el proyecto a largo plazo como vías para extender el control estatal sobre territorios, recursos y pueblos indígenas. En lugar de ampliar la definición de neoextractivismo, argumento que otros imperativos de más larga data —de creación de Estado, modernización y dominio territorial— orientan las ambiciones del Gobierno boliviano para el TIPNIS y el territorio boliviano. Para ello, retomo hitos históricos del proyecto de construcción del Estado nacional de Bolivia en las tierras bajas. Concluyo que en los planes para la Bolivia del siglo XXI del Gobierno de Evo Morales persisten ideas colonialistas, modernizadoras y desarrollistas.

## **El terreno en conflicto**

Este artículo empieza con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure y termina con las tierras bajas devastadas por el fuego en 2019, con atención especial al área protegida Ñembi Guasu, que representan un proceso de territorialización indígena de décadas y de deforestación regional.

Las territorialidades indígenas se refieren a conexiones intensivas con el paisaje, tanto espirituales como ecológicas. Las cosmologías indígenas en el altiplano andino reconocen a los espíritus de las montañas, conocidos como *apus* (quechua) o *achachilas* (aymara), otorgando una santidad que se repite en toda la región. Los pueblos indígenas mojeño-trinitario, tsimané y yuracaré del TIPNIS enmarcan su visión en términos de la *Loma Santa* y la *casa grande*. La búsqueda de Loma Santa, religiosa o como forma de renacimiento cultural, ha impulsado numerosas migraciones que huyeron de la dominación blanca y mestiza y generaron nuevos asentamientos

independientes (Canedo Vásquez, 2011). La visión del territorio indígena como una casa grande lo asemeja a una casa colectiva multifamiliar: la tierra como proveedor abundante para la comunidad. Las comunidades indígenas y campesinas afirman el valor espiritual de sus antiguos patrones de interacción con la tierra y se movilizan para defender sus intereses materiales en un ambiente no contaminado y con suministros de agua adecuados.

Desde la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990,<sup>4</sup> la estrella polar que guía al movimiento indígena de las tierras bajas de Bolivia es la reconstrucción del autogobierno en los territorios de los treinta y tres pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. En 1990 obtuvieron el reconocimiento gubernamental de cincuenta y cinco territorios indígenas. El apoyo del altiplano a la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia [CIDOB] de 1990 también inició una alianza que reorientó la política campesina del altiplano boliviano en torno al lenguaje de la descolonización, la autonomía y los derechos indígenas. Con el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 fueron reconocidos el TIPNIS y tres territorios indígenas más. Entre los de establecimiento más reciente se encuentra el Ñembi Guasu. Esta es un área protegida indígena localizada en el bosque seco de la Chiquitanía, al sureste del departamento de Santa Cruz. Tiene 1,2 millones de hectáreas y está bajo la jurisdicción del Gobierno autónomo Guaraní Charagua Iyambae, oficializado en 2019 (*Los Tiempos*, 18 de junio de 2019). El área protegida, cuyo nombre significa “gran refugio” en guaraní, une los parques nacionales colindantes Kaa Iya del Gran Chaco y Otuquis (Praeli, 2019). El Gobierno de Morales aceleró la titulación de los territorios indígenas, pues hasta 2016, 23,9 millones de hectáreas o el 22 % de la superficie terrestre de Bolivia se había

<sup>4</sup> Cientos de indígenas de las tierras bajas emprendieron esta marcha de treinta y cuatro días para exigir el reconocimiento gubernamental de cuatro territorios indígenas (incluido el TIPNIS, que envió ciento noventa manifestantes) y el Convenio 189 de la OIT. Después de que la marcha llegó a La Paz y recibió un apoyo masivo de los serranos quechuas y aymaras, el Gobierno accedió a sus demandas.

titulado legalmente como parte de territorios indígenas colectivos (*Página Siete*, 2017).<sup>5</sup>

Sin embargo, mientras la autonomía indígena nominal crecía en estos territorios, aumentó su vulnerabilidad ecológica. La deforestación, tanto por asentamientos agrarios como por incendios, es un problema en todas las tierras bajas de Bolivia, incluidos los territorios indígenas. Según un estudio sistemático de la deforestación en los bosques de América del Sur (Kalamandeen et al., 2018, p. 2), el “punto crítico [de tierra deforestada] del sureste de Bolivia”, que “se expandió rápidamente de cubrir un área de ~300 km<sup>2</sup> en 2001-2007 a un área de ~9560 km<sup>2</sup> en 2008-2014” ha emergido como la mayor área de deforestación del continente. La pérdida de bosques primarios en el país superó las 250 000 hectáreas anuales desde 2016 hasta 2021, lo que mantiene a Bolivia entre los cinco primeros en deforestación anual mundial, junto con países mucho más grandes como Brasil e Indonesia (Jong, 2022).

Antes de 1986, era insignificante la pérdida de bosques en la zona sur del TIPNIS. En las dos décadas siguientes, la degradación de los bosques por actividad humana alcanzó aproximadamente 32 000 hectáreas dentro del parque, siguiendo un patrón de densa concentración a lo largo de los caminos que hicieron los colonos en su interior (Siles 2009, 36-38). En 2008, el Instituto Nacional de Reforma Agraria [INRA] formalizó los títulos de los coccaleros de la región situada al sur de la línea roja, dentro del parque. Esa zona, denominada Polígono 7, engloba a unas 124 000 hectáreas que incluyen tierras tituladas tanto a nivel individual como a nivel de comunidades indígenas del TIPNIS. Un estudio del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia [PIEB] realizó una proyección según la cual

<sup>5</sup> Sin embargo, la tierra adjudicada como TIOC fue solo el 56,7 % de la reclamada por las comunidades indígenas. Una fracción variable, de entre el 2,8 % (en los Valles Interandinos) y el 48,5 % (en el Chaco) de las tierras indígenas propuestas fue adjudicada a terceros en el proceso, debilitando numerosos reclamos territoriales, especialmente de los pueblos guaraníes y chiquitanos, y dentro del departamento del Beni (Fundación Tierra, 2011, 11, pp. 46-63).

las tendencias de deforestación existentes llevarían a una pérdida del 43 % de los bosques en el TIPNIS para 2030. La carretera del TIPNIS acelerará la deforestación, al ampliarse el acceso al territorio para los madereros ilegales, así como para los colonizadores agrícolas: al construirse, la proyección de deforestación asciende al 64 % del parque para 2030 (PIEB, 2011). Dentro del TIPNIS, los incendios se generalizaron en el rincón noreste en 2010 y en el Polígono 7 colonizado en 2020. En total, los incendios afectaron hasta el 6,6 % del parque en un año (CEJIS y CPTA, 2021, p. 91).

## **Neoextractivismo o un regreso a imperativos territoriales tradicionales**

En los primeros años de la administración de Evo Morales, un Gobierno nacional parecía haber unido su voz a la de los movimientos indígenas y ambientalistas transnacionales. Ya sea en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cumbre del Clima de Copenhague, las reuniones de la naciente Unasur o la propia Asamblea Constituyente de Bolivia, los representantes oficiales estuvieron hombro con hombro con los líderes de los movimientos sociales. En uno de esos eventos, el Canciller David Choquehuanca convocó al cuerpo diplomático extranjero para asistir a un caucus indígena hemisférico en marzo de 2010. Su discurso de apertura definió los esfuerzos tanto de su Gobierno como del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas como parte de un *pachakuti*, que él definió como “una vuelta al equilibrio” entre los pueblos y entre los seres humanos y la naturaleza. Las alianzas indígenas transnacionales, principalmente las confederaciones andina y amazónica CAOI y COICA,<sup>6</sup> plantean una críti-

<sup>6</sup> La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas [CAOI] y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica [COICA] son confederaciones transnacionales de pueblos indígenas de las tierras altas andinas y las tierras bajas amazónicas.

ca frontal a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana [IIRSA] y a la industrialización extractiva. “Las prácticas de los invasores de ayer son hoy prácticas de las empresas transnacionales [...] [que] imponen en nuestros territorios la extracción y saqueo de los recursos naturales”, declararon en resolución final de la Causa (*Fondo indígena*, 2010).

Sin embargo, esta alianza estaba a punto de romperse. Al mes siguiente, la Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu [CONAMAQ] y CIDOB iniciaron una disputa pública sobre la agenda de la Cumbre Climática de los Pueblos en Tiquipaya. Habían propuesto un grupo de trabajo sobre problemas ambientales internos en Bolivia, a lo que Morales y Choquehuanca rechazaron públicamente. Al final, la Mesa 18 se llevó a cabo de forma paralela a las sesiones oficiales. CONAMAQ junto a cuatro organizaciones indígenas más pequeñas, una federación campesina y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra se unieron a ambientalistas y académicos para organizar dos días de sesiones ante una masiva audiencia. Entre los críticos estuvo Rafael Quispe de CONAMAQ, quien arremetió contra el “doble discurso” del Gobierno de Morales: “Este Gobierno habla de respeto a la Madre Tierra, pero igual contamina la tierra” (*La Prensa*, 16 de abril de 2010).

El alejamiento del ambientalismo y los derechos territoriales indígenas ha sido ampliamente interpretado en el marco del neoextractivismo. Eduardo Gudynas (2009, p. 193) argumentó que los Gobiernos progresistas en América del Sur estaban emprendiendo “un extractivismo de nuevo tipo”: bajo un mayor control estatal, al servicio de la financiación de programas sociales progresistas, pero ambientalmente destructivos y contrarios al prometido reconocimiento de los derechos indígenas. Profundizando en esta perspectiva, Maristella Svampa propone un *commodity consensus* (a la par del neoliberal Consenso de Washington) mientras Murat Arsel et al. hablan de un imperativo extractivo ideológico (Svampa, 2015; Arsel et al., 2016).

La narrativa del neoextractivismo es una historia trágica de Gobiernos que se alejaron de sus principios proindígenas y ambientalistas por sus ideales socialistas. El Estado boliviano sí tiene un interés financiero directo en la extracción de petróleo y gas, la minería de litio y estaño y la generación de electricidad. Sin embargo, otras iniciativas como la carretera TIPNIS y la expansión agraria, parecerían ofrecer menos beneficio directo al Gobierno. Las carreteras requieren nueva financiación a través de deuda, y no prometen una fuente directa de ingresos futuros. La ampliación de la frontera agraria aumentaría las exportaciones bolivianas, pero no llenaría los bolsillos del Gobierno. Además, muchas de estas políticas quitan poder a los sectores sociales de izquierda tradicionales o empoderan a las élites capitalistas de modo contrario a la supuesta orientación socialista del neoextractivismo.

En conjunto, estas políticas exigen una explicación más amplia. Argumento aquí que otros dos elementos del arte de gobernar la brindan: (1) los imperativos de la soberanía estatal; y (2) el compromiso de los ideólogos de izquierda en la modernización del territorio y la población. Bajo la influencia de estos dos factores, el Estado se ha vuelto cada vez más centralizado y sus aspiraciones sobre el territorio nacional obedecen a un enfoque centrado en su propia soberanía unitaria, en desmedro de la pluralización del poder prometida por la constitución. La experiencia del plurinacionalismo en Bolivia plantea la cuestión de si el Estado puede realmente ser un árbitro neutral sobre estas territorialidades en conflicto.

Era demasiado fácil subestimar las raíces ideológicas e institucionales del extractivismo. Como veremos abajo, líderes del proceso del cambio prometieron, en sus discursos y en la nueva constitución, un nuevo modelo económico y ecológico. En Bolivia, el compromiso de centralizar el control estatal sobre la tierra y el gas aparece en todas las capas históricas de la política progresista, desde el estadismo administrativo hasta la alianza nacional-popular de 1952, pasando por la colonización agraria de los cocaleros, hasta las batallas políticas del siglo XXI. Atraviesa así muchas de

las tradiciones históricas que nutren al Movimiento al Socialismo, con la crítica excepción de *algunos* movimientos indígenas. En las próximas dos secciones expongo las raíces de esta división, considerando a su vez el arte de gobernar moderno, el movimiento indígena global y sus ecos contradictorios dentro de la coalición de izquierda de base boliviana.

## **El legado desarrollista dentro del MAS-IPSP**

No son mis hermanos indígenas, sean del Chaco, de la zona del Isiboro o de otras zonas que se oponen a la exploración del petróleo o del gas o finalmente a la ejecución de la construcción de caminos. ¿Cómo pueden oponerse?, no puedo entender a los hermanos indígenas. (Evo Morales, *Erbol Digital*, 14 de julio de 2011)

En Bolivia, existe una escisión fundamental entre el enfoque centralizador y desarrollista del territorio y el enfoque indígena pluralista. Sin embargo, en Bolivia y en otros lugares esta división fractura a la propia izquierda. Muchos defensores de la soberanía territorial indígena respaldan una “alternativa de civilización” al capitalismo occidental (CSUTCB et al., 2010) y desafían los modelos de desarrollo centrados en las industrias extractivas. Pero otros movimientos izquierdistas, sindicalistas y de la clase trabajadora en Bolivia apuestan por modelos desarrollistas de progreso, apoyan el asentamiento de nuevas tierras y ven en la extracción de riqueza mineral e hidrocarburífera la base del futuro de Bolivia. Estos compromisos no son solo ideológicos, se basan en la posición económica de los mineros, cocaleros y colonos agrarios y han orientado estrategias de progreso social y económico colectivo durante décadas. De hecho, como se detalla más adelante, muchos de los electorados de base dentro del MAS-IPSP son resultado y a su vez defensores de este impulso colonizador.

En 1952, los campesinos altiplánicos se aliaron con los sindicatos y una élite progresista en una Revolución Nacional dedicada tanto a la reforma agraria como a la modernización. Muchos indígenas de las tierras altas se convirtieron en propietarios individuales de tierras en manos de las élites nacionales durante mucho tiempo. El Gobierno posterior a 1952 buscó ampliar el área de su soberanía efectiva fomentando la llamada Marcha hacia el Este: la colonización de los valles tropicales (o Yungas) de La Paz y el Chapare, así como un corredor este-oeste alrededor de Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento oriental más grande. El Ejército tomó la iniciativa en la limpieza de campos para cultivo en Santa Cruz, y la empresa estatal de gas YPFB abrió pozos en los campos petroleros del sur. El Gobierno orquestó la migración y asentamiento de miles de familias, así como asentamientos de comunidades menonitas japonesas y multinacionales dentro del departamento de Santa Cruz (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004, p. 67). Esta colonización dirigida, a su vez, inspiró a una población mucho mayor de migrantes “espontáneos” a trasladarse a estas regiones.

En el Chapare, esta migración espontánea llegó a dominar la región. Decenas de miles de migrantes —primero campesinos de habla quechua de otras partes del departamento de Cochabamba, luego montañeses rurales de habla quechua y aymara, y finalmente mineros que quedaron sin trabajo por la terapia de choque neoliberal— se asentaron en la zona. Para 1989, la población del Chapare había llegado a 350 000, un aumento de catorce veces con respecto a 1967 (Grisaffi, 2010, p. 429). Los inmigrantes que talaron bosques para nuevos campos agrícolas fueron recompensados por el Gobierno con títulos de propiedad de sus tierras, proceso mediado por los sindicatos de colonos. Los migrantes están representados por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la principal organización sindical de cocaleros del Chapare. Si bien el Estado fomentó una variedad de cultivos comerciales en la región, ninguno resultó tan exitoso como la hoja de coca. Los colonos agrarios (autodefinidos como “comunidades interculturales” recientemente) ocupan

un lugar ambivalente en la jerarquía racial boliviana: son despreciados y excluidos por las élites blancas / mestizas de Oriente; pero también participan en la limpieza de tierras forestales, incluidas aquellas que forman parte de la base territorial de los pueblos indígenas de las tierras bajas. En el Chapare, esto ha implicado la constante invasión de los territorios indígenas Isiboro-Sécure, Yuracaré y Yuki (Paz Patiño, 1994).

En mayo de 2006, Morales nacionalizó parcialmente la industria del gas y dirigió el aumento de los ingresos fiscales del sector a programas redistributivos de transferencia de efectivo para personas mayores, niños en edad escolar y mujeres embarazadas. Mientras tanto, de 2006 a 2009, los políticos de oposición de las tierras bajas orientales (mayoritariamente blancos o mestizos, no indígenas) montaron una campaña separatista basada en readjudicarse la riqueza petrolera del Chaco. Por todas estas razones, el control sobre el territorio, el petróleo y el gas por parte del Gobierno central a menudo se considera una ganancia significativa. El Gobierno se ve a sí mismo como dueño del gas: “El gas es nuestro” (eslogan de protesta de 2003). La empresa de gas renacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es socia en los contratos de petróleo y gas a nivel nacional, es la responsable de cumplir con este compromiso.

Como portavoz de una mayoría indígena marginada, que promete un camino hacia el “socialismo del siglo XXI”, el MAS-IPSP ha proclamado públicamente ambas posiciones. Pero como coalición de grupos de base impulsado por cultivadores de coca del Chapare, naturalmente se sintió atraído hacia las visiones coloniales de la tierra. Y como administrador del Estado boliviano, asumió el papel tradicional del Gobierno, orquestador del desarrollo extractivo de los recursos naturales en pos de las metas estatales y el crecimiento macroeconómico. Una vez que la constitución estuvo en vigor, el MAS-IPSP no mostró entusiasmo por descentralizar el poder del Gobierno nacional, que controlaba. La Ley Marco de Autonomía y Descentralización de 2010 impuso requisitos poblacionales y

territoriales, que significaron que solo veinticinco de los ciento noventa y cinco territorios indígenas fueran elegibles para la autonomía legal. La fricción por esta ley fue tema central de una marcha de CIDOB en 2010, que evidenció una temprana hostilidad entre el movimiento indígena y el Gobierno de Morales (Bjork-James 2020b, pp. 194-198).

### **TIPNIS como caso emblemático**

Pero la ruptura real e irreversible devino del conflicto sobre la carretera a través del TIPNIS. Cuando docenas de conflictos socioambientales se cocían a fuego lento en Bolivia, Isiboro-Sécure adquirió una resonancia simbólica única. Unos ciento noventa habitantes del territorio estuvieron presentes el primer día de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 y regresaron a sus hogares con un decreto gubernamental que convirtió al Parque Nacional Isiboro-Sécure (establecido en 1964) en Tierra Comunitaria de Origen [TCO]. El propio Morales entregó el título colectivo de la mayor parte del parque a la Subcentral TIPNIS en junio de 2009, organización que representa a más de sesenta y cuatro comunidades mojeño-trinitario, tsimané y yuracaré dentro del territorio. El Polígono 7, que comprende 124 000 hectáreas del sur (10 % del parque), estaba reservado para colonos cocaleros que se habían asentado en el parque desde mediados de la década de 1980.

Durante años, la Subcentral se opuso frontalmente al proyecto de la carretera Villa Tunari-San-Ignacio de Moxos, que uniría el densamente poblado de Chapare con el departamento amazónico del Beni. La carretera de 306 km pasaría por Isiboro-Sécure a lo largo del Segmento II de 177 km desde Isinuta a Monte Grande, dividiendo al parque por la mitad. En el proceso, la línea roja que limita la colonización se volvería indefendible. Ignorando la oposición local, el Gobierno de Morales siguió adelante con el proyecto: redactar el diseño (2008), obtener un préstamo del banco de desarrollo

BNDES de Brasil (principios de 2011) y comenzar la construcción (junio de 2011).

CIDOB y CONAMAQ, junto con un segmento importante del público boliviano, encabezaron una prolongada y activa campaña de protesta contra la carretera del TIPNIS en 2011 y 2012. Después de un intento fallido de reprimir el movimiento, arrestando en masa a los manifestantes anticarretera, el movimiento creció: se inició una segunda marcha organizada por CONAMAQ. Se desarrollaron paros coordinados a nivel nacional y miles de ciudadanos dieron la bienvenida a los reagrupados que marcharon a la capital. En respuesta, el Gobierno boliviano suspendió la construcción del Segmento II a través del TIPNIS en septiembre de 2011 y abandonó temporalmente las obras en 2012, luego de que el Gobierno brasileño retirara su financiamiento. Mientras tanto, el Gobierno dispuso un proceso de consulta formal en el territorio de julio a diciembre de 2012, que pasó por alto a las organizaciones comunitarias tradicionales y se inclinó hacia la obtención de la aprobación.

“La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos lo que hará es sentar la presencia del Estado boliviano en la Amazonía” (García Linera, 2013a, p. 59). Así escribió el vicepresidente Álvaro García Linera en su polémico libro en defensa de la carretera. Este discurso asume a los territorios indígenas, no como áreas de autogobierno donde pueblos preexistentes ejercen “dominio ancestral... autonomía y autogobierno” (artículo 2 de la Constitución de 2009), sino como espacios vacíos, donde el Estado está ausente. Sin embargo, la visión del Gobierno va más allá de la inclusión en el mercado, para abarcar los vínculos económicos, la política interna y el control soberano. Continúa el texto de García Linera:

La carretera será como una grampa que una a dos regiones del país centenariamente separadas una de otra, cuya desvinculación precisamente permitió un siglo atrás pérdidas territoriales, y recientemente la sustitución del Estado por poderes ilegales, hacendales y extranjeros. Se trata pues de un mecanismo de territorialización de

la geografía por parte del Estado y de asentamiento de la soberanía.  
(García Linera, 2013a, p. 60)

Los funcionarios del Gobierno de Morales enmarcaron el conflicto del TIPNIS en términos de modernización, integración e incluso “civilización” de los indígenas. A su juicio, sus comunidades sufren la “ausencia del Estado”, la “extrema pobreza” y su propio atraso. Como lo expresó el dirigente de la CSUTCB, Ricardo Coraite, “Hay que diferenciar cuál da más beneficios a nuestros hermanos del TIPNIS, la carretera o es que (prefieren) mantenerse en la clandestinidad, mantenerse como indigentes, mantenerse como salvajes” (Mealla, 2011). La noción de “salvajismo” que ofrece Coraite, un agricultor aymara, es precisamente la descrita por James Scott (2009, pp. 98-99), manteniéndose fuera de los circuitos de vigilancia estatal y de la economía monetaria. O como lo expresó García Linera: “Vivir apartados como animales de bosque” contrasta con cómo los indígenas del TIPNIS “vivirán como personas” con la construcción de la carretera (Barrios González, 2015).

Estas descripciones de pobreza y atraso contrastan fuertemente con las de los habitantes del TIPNIS que se refieren a “esta gran riqueza natural que Dios nos dio para usarlo” (Adolfo Moya Rosendy), experimentada a través de un paisaje abundante. Mirian Yubanure Moya, entonces presidenta de la Organización de Mujeres TIPNIS, explicó: “en el TIPNIS nos gusta convivir con los animales, en el monte, en el río comiendo pescaditos todo fresquito... nos gusta proteger y utilizar nuestros recursos naturales conservando de que no se terminen” (Subcentral TIPNIS y Campaña en Defensa del TIPNIS, 2010, pp. 9, 38). Sus líderes indígenas reconocen limitaciones económicas, pero proponen otros medios para abordarlas: expansión del comercio controlado por la comunidad con productos básicos de alto valor (como chocolate o cuero de cocodrilo), ecoturismo y la provisión estatal de bienes colectivos como escuelas y clínicas (Orozco Ramírez et al., 2006, p. 97).

## Centralización y territorialidad homogénea

La Mesa 18 de la sesión rebelde de la Cumbre de Tiquipaya declaró: “Los planes de desarrollo de estos Gobiernos, incluido el de Bolivia, solo reproducen el esquema desarrollista del pasado” (CONAMAQ, 2010). El Gobierno del MAS-IPSP ya eligió el desarrollismo. Pero también ensayó una fórmula que podría presentar a la centralización de la soberanía como beneficiosa y, de hecho, como un acto de descolonización. Eso se llamaría la “territorialidad homogénea”.

En un ensayo de 2013 sobre la “Topología del Estado”, García Linera describe al Estado plurinacional como aquel que finalmente superó cinco siglos de ordenamiento colonial de Bolivia. Durante ese período, el Estado era “unicéntrico” y creaba un “agujero negro territorial” (es decir, la capital y las principales ciudades) que “absorberá toda la riqueza de las naciones indígenas y no distribuirá nada”. Por el contrario, argumenta, el Estado plurinacional tendrá siete regiones iguales (las llamadas “macroregiones”), cada una con su propio gran proyecto de desarrollo. Equilibrado por estos polos, “La territorialidad del Estado plurinacional es homogénea, es decir, geográficamente similar en derechos en cualquier lugar de la patria” (García Linera, 2013b). En una entrevista de 2014, García Linera afirmó: “Solo mediante esta incorporación de cada centímetro cuadrado de la geografía estatal... solo entonces la plurinacionalidad se consolidará y el horizonte de un Estado comunitario y socialista llegará” (García Linera, 2014).

La visión de territorialidad homogénea extiende la mirada disciplinaria del Estado moderno sobre todas las regiones del territorio nacional. Es decir, incorpora la legibilidad universal de James Scott, para “ver como un Estado”, y la propiedad y gestión estatal de los recursos propuesta en las visiones desarrollistas del socialismo. Además, la “integración” implica la provisión directa por parte del

estado de los servicios, la participación en la economía monetaria y la vigilancia de las actividades.

La territorialidad homogénea se opone directamente a los ideales de autonomía indígena y reconstitución del territorio, establecidos por los movimientos indígenas en Bolivia y en todo el hemisferio. Estas visiones proponen que los pueblos indígenas deberían ser capaces de reconstituir sus tierras natales como espacios de autogobierno, organizados de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, y administrados en armonía con estilos de vida definidos localmente. Las principales intervenciones externas, especialmente los proyectos de infraestructura y de extracción a gran escala, solo deben ocurrir con el consentimiento de la población local, según lo determinen sus propias instituciones, sobre la base de la distribución de beneficios y la compensación por daños. Todos estos marcos interrumpen el control directo de la tierra y las personas por parte de un Estado central singular. El objetivo de preservación de las diversas formas de vida y culturas —expresado, por ejemplo, en el lema zapatista “un mundo donde quepan muchos mundos”— va en contra del impulso de incorporar y asimilar a los pueblos indígenas en una singular modernidad definida por el Estado y las fuerzas del mercado.

El Gobierno de Morales planteó su visión territorial como parte de su Agenda Patriótica 2025. Formuló objetivos cuantitativos para el uso de la tierra, el agua y los recursos naturales de Bolivia. Los planificadores del Gobierno boliviano trabajaron en un amplio lienzo: el área completa de 110 millones de hectáreas del territorio nacional de Bolivia.

Treinta y cinco grandes represas hidroeléctricas anclan la propuesta de la Agenda para convertir a Bolivia en “el corazón energético de América del Sur”, un país exportador de electricidad. El complejo El Bala / El Chepete inundaría partes del Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, ambos territorios indígenas en la cuenca del Amazonas. La transformación integral del paisaje boliviano se sustenta en nuevas formas de

“vertebralización”. Un ferrocarril bioceánico conectaría la carga de exportación boliviana con los puertos de Brasil y Perú. Se construirían nuevas carreteras, principalmente en las tierras bajas del norte y el este: más de 4 800 km en un programa de 11 000 millones de dólares estadounidenses para mejorar la red vial.

Pero el cambio más dramático propuesto en la Agenda Patriótica es la llamada “ampliación de la frontera agrícola”: aumentar la superficie total cultivada de 3,3 millones de hectáreas (en 2013) a 13 millones de hectáreas en 2025.

## **De expansión agraria a catástrofe ambiental**

El MAS ya no es el de 2005, ha ido mudando la propuesta, ya no es tan comunitario, ahora ha abrazado el “modelo cruceño”, que es capitalista. [...] Tenemos que trabajar con lo que existe y esos son empresarios, que tienen que reforzarse, crecer y generar más riqueza. (Álvaro García Linera, entrevista con *El Deber*, Santa Cruz, 2015)

Bajo el auspicio de la expansión general del sector agropecuario, el Gobierno de Morales promovió el crecimiento tanto de la tierra cultivada como de los rebaños productores de carne. Planeaba que la tierra bajo cultivo alcanzara los 4,7 millones de hectáreas para 2020 y los rebaños de ganado unos 11 millones de cabezas, aumentando en un tercio en siete años (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2016, p. 57). Estos sectores, especialmente en los departamentos de tierras bajas de Santa Cruz, Beni y Pando, están dominados por agricultores y ganaderos capitalistas. El Gobierno de Morales, con el vicepresidente García Linera a menudo actuando como vocero, promovió su cooperación con los terratenientes de las tierras bajas como una maniobra política inteligente, “incorporando al adversario” en su órbita mientras fomentaba el crecimiento económico a través del desarrollo agropecuario.

Si bien la agroindustria a gran escala es la forma principal de organizar la producción de cultivos de exportación, los colonos agrarios impulsan el cambio de uso de la tierra y reclaman nuevas propiedades a menor escala. Entre 2013 y 2018, el Instituto Nacional de Reforma Agraria autorizó alrededor de 1.400 nuevos asentamientos en tierras fiscales.<sup>7</sup>

El esfuerzo se operativizó a través de una cascada de leyes, decretos administrativos e iniciativas de titulación:

- La Ley 741 (expedida el 29 de septiembre de 2015) autorizó a los propietarios y familias que viven en tierras comunales a desmontar hasta veinte hectáreas de bosque cada uno, sin presentar planes de ordenamiento territorial obligatorios previamente.
- Ley 1171 (expedida el 25 de abril de 2019) sobre uso y manejo racional de incendios, autorizó descuentos en multas pasadas por quemas ilegales.
- Decreto Supremo 26975 (emitido el 9 de julio de 2019 y por lo tanto justo antes de la temporada de incendios) amplió los derechos de desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
- El 12 de agosto de 2019, la ABT emitió un indulto por los incendios ilegales pasados según lo autorizado por la Ley 1171.
- Luego, el 27 de agosto, la ABT extendió el plazo para presentar nuevos permisos de desmonte a pesar de una orden presidencial de “pausa ecológica” en toda actividad de este tipo.

En este contexto, los nuevos reclamos de tierras a pequeña escala generalmente fueron seguidos por permisos para la tala, la venta de madera en tierras recientemente reclamadas y la venta

<sup>7</sup> “Chiquitanía: desde 2013 el desmonte creció 317 % y hubo mil asentamientos” (*Los Tiempos*, 8 de septiembre de 2019).

de las tierras a empresas agrícolas más grandes para la producción de soja y ganado a gran escala. Los investigadores de CEJIS y Fundación Tierra describen la siembra de cultivos como mínima, solo lo suficiente como para servir como una tapadera que demuestre su legitimidad como colonos agrícolas antes de vender la tierra en el mercado abierto (*Los Tiempos*, 9 de septiembre de 2019).

Este proceso de titulación por parte del Gobierno nacional amplió los conflictos administrativos con otros niveles de Gobierno. Los funcionarios del departamento de Santa Cruz objetaron el ritmo creciente de los asentamientos y la llegada de votantes típicamente partidarios del MAS-IPSP a su departamento, de tendencia derechista. Los funcionarios locales y los pequeños agricultores se irritaron porque el INRA otorgaba tierras a los recién llegados cuando la ley subyacente establecía que los locales a largo plazo deberían tener prioridad en el proceso de titulación. Y las autoridades indígenas citaron demandas pendientes desde hace mucho tiempo para la regularización de la titulación de sus territorios y, en un caso, violaciones de sus esfuerzos por regular de manera autónoma el uso de la tierra para la protección ambiental. Según autoridades de Charagua, municipio autónomo guaraní del sureste de Santa Cruz, se adjudicaron a cincuenta y ocho comunidades más de trescientas mil hectáreas de tierra dentro del área protegida Ñembi Guasu (*Los Tiempos*, 18 de junio de 2019).

## **Fuego**

Los actos de talar árboles, vender madera, quemar lo que queda y plantar o criar ganado en la tierra no son solo actividades económicamente viables en Bolivia, forman la base legal para la propiedad de la tierra. A pesar de sus consecuencias a veces destructivas y en desconocimiento de cualquier valor inherente en el bosque preexistente, estos actos se imaginan como “mejora” y como una demostración de la disposición y capacidad del colono para “trabajar

la tierra”. Para los grandes terratenientes, estos usos de la tierra demuestran que cumple una función económica, asegurándola frente a la (cada vez más hipotética) perspectiva de redistribución de la tierra a los residentes rurales más pobres. Tanto en la práctica como en el derecho, el fuego —y la cadena de transformaciones en la que está inmerso— convierte la tierra, especialmente las tierras fiscales, en propiedad.

El fuego es al mismo tiempo un sujeto de las regulaciones gubernamentales y una fuerza natural que excede su alcance. Los incendios y desmontes son planificados y autorizados, con técnicas físicas y permisos formales que permiten iniciarlos y desmontar terrenos. Pero los costos de obtener un “Plan de Chaqueo” a menudo estaban fuera del alcance de los pequeños agricultores, por ello la tala y los incendios ilegales. Gran parte de la política agrícola reciente suavizó tales permisos, perdonó multas por incumplimiento o reconoció reclamos de tierras basados en desmonte ilegal de tierras. Sin embargo, aunque los incendios crean derechos de propiedad, no respetan los límites de propiedad, al propagarse hacia territorios contiguos por el viento y favorecidos por el calor. La temporada de incendios se alarga y la lluvia, que es el mejor límite al impacto de los incendios, llega tarde.

Si bien todos los años se queman deliberadamente futuras tierras agrícolas en Bolivia, los incendios de 2019 se convirtieron en un desastre regional de proporciones inusuales. En tan solo diez semanas (hasta el 25 de septiembre), los incendios consumieron más de 5,3 millones de hectáreas del territorio boliviano y unos 3,9 millones de hectáreas solo en Santa Cruz, más del 10 % del departamento. Cerca de 2 millones de hectáreas de bosque que se quemaron pertenecían al departamento, incluyendo al menos una sexta parte del bosque seco chiquitano (1,4 / 8,6 millones de ha). Los crucesos vieron cómo llegaban diariamente noticias del desastre, incluidas pérdidas devastadoras en doce áreas naturales protegidas y la muerte de cinco personas que peleaban contra los incendios.

La responsabilidad para los incendios de 2019 en Santa Cruz varía por subregión dentro del departamento. En un estudio comprensivo la Fundación Tierra concluyó que en San Ignacio de Velasco y San Matías (hacia el noreste del departamento) había una continuación del chaqueo para expansión de grandes operaciones agropecuarias. Pero más llamativo en sus consecuencias fue el incendio que surgió al sur del municipio del Roboré. Como en varios otros casos, el chaqueo se salió de control y se convirtió en una conflagración que afectó tierras más amplias, en este caso el Ñembi Guasu y otras que alcanzaron la frontera con Paraguay.

Empezó aproximadamente el 9 de agosto con un chaqueo cerca del límite sur del municipio Roboré. Carlo Pinto lo narró, “Fue una tormenta perfecta: rachas de viento de setenta kilómetros por hora, la helada había dejado el monte bien seco y los vientos del norte arrastraron el incendio forestal hacia el sur, en más de cien kilómetros de trayectoria” (*El Deber*, 2019). El origen ya no fue esclarecido meses después, pero hay presencia de asentamientos en busca de reconocimiento oficial en la zona (Fundación Tierra, 2019, p. 83). Dentro del Ñembi Guasu este incendio fue devastador; se estima que se quemaron 381 567 hectáreas en septiembre de 2019, el 32 % del área protegida. Un estudio ecológico encontró pérdidas del 73 al 96 % entre cuarenta y ocho especies de mamíferos en el parque (Pacheco et al., 2021).

## **Conclusión**

Una lectura atenta de las declaraciones de los funcionarios en la Agenda Patriótica y sobre el desarrollo en el TIPNIS muestra que los políticos bolivianos a menudo recurren al discurso retórico de la soberanía estatal moderna para definir y defender sus políticas de desarrollo y sus tierras preferidas. A la luz del marco del Estado moderno, la controversia de la carretera TIPNIS no es simplemente un ejemplo de las contradicciones del Estado plurinacional. En

cambio, el episodio reveló la visión unitaria y extractivista más amplia que requiere el abandono de los principios etnoecológicos proclamados por ese Estado. Los Gobiernos de izquierda, incluidos los que abrazan públicamente la retórica posextractivista, continúan guiados por una fe desarrollista en la modernidad, la integración del mercado y las exportaciones de productos básicos como un medio esencial para el crecimiento económico y el progreso.

Al agregar cláusulas constitucionales sobre los derechos indígenas, el Gobierno plurinacional de Bolivia no alteró los aparatos preexistentes de gestión de recursos, como los Ministerios de Minería e Hidrocarburos. Asimismo, el interés económico de los Estados en los ingresos por extracción de recursos y la inversión política en la soberanía expansiva permanecen sin cambios. Finalmente, las ideas etnocéntricas del progreso de la civilización a través de la colonización y la integración del mercado son las contrapartes culturales, a veces pasadas por alto, de los argumentos económicos del desarrollismo.

Cuando los activistas propusieron convertir los Estados modernos en Estados plurinacionales, deberíamos haber esperado ambivalencia, resistencia y rechazo. Bolivia es ampliamente reconocida como un caso extremo de transformación estatal. Entonces, si la naturaleza subyacente del Estado es resistente al cambio allí, eso sugiere que los límites internos sobre la transformación del Estado son bastante fuertes en general, y los desafíos que enfrenta el pluralismo legal centrado en lo indígena pueden ser considerablemente más profundos de lo que suponían algunos observadores.

Con el binomio Luis Arce / David Choquehuanca, el Gobierno actual replica la división entre desarrollismo y pachamamismo. De la misma manera, como durante el Gobierno de Morales, el pachamamismo sigue siendo la retórica y el desarrollismo la práctica.

## Bibliografía

Arsel, Murat; Hogenboom, Barbara y Pellegrini, Lorenzo. (2016). The extractive imperative in Latin America. *The extractive industries and society*, 3 (4), 880-887. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.014>

Barrios, Franz. (16 de junio de 2015). El carácter “sagrado” del TIPNIS. *Quid pro quo*. <http://franzrafaelbarriosgonzalez.blogspot.com/2015/06/el-caracter-sagrado-del-tipnis.html>

Bjork-James, Carwil. (2020a). Left populism in the heart of South America: from plurinational promise to a renewed extractive nationalism. En Jeff Maskovsky y Sophie Bjork-James (eds.), *Beyond populism: angry politics and the twilight of neoliberalism* (pp. 209-236). Morgantown W. V.: West Virginia University Press.

Bjork-James, Carwil. (2020b). *The sovereign street: making revolution in urban Bolivia*. Tucson: University of Arizona Press.

Canedo Vásquez, Gabriela. (2011). *La Loma Santa una utopía cercada: territorio, cultura y Estado en la Amazonía boliviana*. La Paz: Plural Editores.

Centellas, Miguel. (2010). Bolivia's radical decentralization. *Americas quarterly*, 4 (3), 34-38.

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social y Centro de Planificación Territorial Autónoma [CEJIS y CPTA]. (2021). *Incendios en territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia: análisis del periodo 2010-2020*. Santa Cruz de la Sierra: CEJIS.

Corz, Carlos. (11 de septiembre de 2019). Indígenas anuncian marcha desde La Chiquitanía contra leyes que ponen en riesgo su territorio. *La Razón*. <https://www.la-razon.com/sociedad/2019/09/11/>

indigenas-anuncian-marcha-desde-la-chiquitania-contrale-yes-que-ponen-en-riesgo-su-territorio/

CSUTCB; Bartolinas; Interculturales; CONAMAQ; CIDOB, y CSCIB (2010). Anteproyecto de ley de la Madre Tierra del Pacto de Unidad. <http://www.cambioclimatico.org.bo/derechosmt/052011/AnteproyectoMT%20220211.pdf>

*El Deber*. (28 de agosto de 2019). Nadie atiende el incendio de Ñembi Guasu: el área protegida más joven. [https://eldeber.com.bo/santa-cruz/nadie-atiende-el-incendio-de-nembi-guasus-el-area-protegida-mas-joven\\_128217](https://eldeber.com.bo/santa-cruz/nadie-atiende-el-incendio-de-nembi-guasus-el-area-protegida-mas-joven_128217)

*Erbol Digital*. (14 de julio de 2011). Evo observa a quienes se oponen a la exploración en áreas protegidas como el TIPNIS. <http://web.archive.org/web/20110714202623/http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483947145>.

*Fondo indígena*. (19 y 20 de marzo de 2010). Caucus indígena boliviano, centro y Sud América para “vivir bien”, La Paz, Bolivia. [http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/items/Caucus\\_Ind\\_gena.pdf](http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/items/Caucus_Ind_gena.pdf)

Fundación Tierra. (2011). *Territorios indígenas originarios campesinos en Bolivia: entre la Loma Santa y la Pachamama*. La Paz: Fundación Tierra.

Fundación Tierra. (2019). *Fuego en Santa Cruz: Balance de los incendios forestales 2019 y su relación con la tenencia de la tierra*. Primera edición. Informe especial. La Paz: Fundación Tierra.

Garcés, Fernando (ed.). (2010). *El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una propuesta de constitución política del estado: sistematización de la experiencia*. La Paz: Unitas. [http://www.redunitas.org/PACTO\\_UNIDAD.pdf](http://www.redunitas.org/PACTO_UNIDAD.pdf)

García Linera, Álvaro. (2013a). *Geopolítica de la Amazonía: poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista*. La Paz: Vicepresidencia del Estado plurinacional. [https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/geopolitica\\_de\\_la\\_amazonia.pdf](https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/geopolitica_de_la_amazonia.pdf).

García Linera, Álvaro. (17 de febrero de 2013b). Topología del Estado. *La Razón*. <https://www.la-razon.com/voces/2013/06/13/la-topologia-del-estado/>

García Linera, Álvaro. (18 de noviembre de 2014). Sáquense el chip de que el Gobierno va a dar el golpe y a estatizar todo (entrevista). *El Deber*. <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/saquense-chip-gobierno-dar-golpe.html>

Grisaffi, Thomas. (2010). We are originarios... “we just aren’t from here”: coca leaf and identity politics in the Chapare, Bolivia. *Bulletin of Latin American research*, 29 (4), 425-439. <https://doi.org/10.1111/j.1470-9856.2010.00385.x>

Gudynas, Eduardo. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. En Jürgen Schuldt, Alberto Acosta, Alberto Barandiarán, Anthony Bebbington, Mauricio Folci, CEDLA Bolivia, Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas, *Extractivismo, política y sociedad* (pp. 187-225). Quito: Centro Andino de Acción Popular y Centro Latinoamericano de Ecología Social.

Jong, Hans Nicholas. (28 de abril de 2022). 2021 tropical forest loss figures put zero-deforestation goal by 2030 out of reach. *Mongabay environmental news*. <https://news.mongabay.com/2022/04/2021-tropical-forest-loss-figures-put-zero-deforestation-goal-by-2030-out-of-reach/>

Kalamandeen, Michelle; Gloor, Emanuel; Mitchard, Edward; Quincey, Duncan; Ziv, Guy; Spracklen, Dominick; Spracklen, Benedict; Adami, Marcos; Aragão, Luiz, y Galbraith, David. (2018).

Pervasive rise of small-scale deforestation in Amazonia. *Scientific reports* 8 (1): 1-10. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-19358-2>

*La Prensa*. (16 de abril de 2010). Cumbre de Pueblos no debatirá problemas ambientales internos. <https://eju.tv/2010/04/cumbre-de-pueblos-no-debatir-problemas-ambientales-internos/>

*La Razón*. (13 de julio de 2011). Evo acusa a dirigentes del TIPNIS de pedir dinero. <https://web.archive.org/web/20110719023729/https://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133677&EditionId=2589>

*Los Tiempos*. (18 de junio de 2019). INRA admite dotación de tierra en área de conservación Ñembi Guasu. <https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190618/inra-admite-dotacion-tierra-area-conservacion-nembi-guasu>

*Los Tiempos*. (8 de septiembre de 2019). Chiquitanía: desde 2013 el desmonte creció 317 % y hubo mil asentamientos. <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190908/chiquitania-2013-desmonte-crecio-317-hubo-mil-asentamientos>.

*Los Tiempos*. (9 de septiembre de 2019). Indicios: asentados trafican tierra y madera y no cumplen función social. <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190909/indicios-asentados-trafican-tierra-madera-no-cumplen-funcion-social>

Mamani Ramírez, Pablo. (2017). “Estado Plurinacional” autoritario del siglo XXI. *Religación*, 2 (6), 68-95. <https://www.redalyc.org/pdf/6437/643767439002.pdf>

Mealla, Luis. (8 de septiembre de 2011). Discriminación. Indígenas demandan enjuiciar a dirigente campesino masista que les llama “salvajes”. *Página Siete*. <http://eju.tv/2011/09/discriminacion-indgenas-demandan-enjuiciar-a-dirigente-campesino-masista-que-les-llama-salvajes/>

Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2016). *Plan de Desarrollo Económico y Social, 2016-2020*. La Paz: Ministerio de Planificación del Desarrollo. [https://www.bivica.org/files/plan-desarrollo\\_Bolivia\\_2016.pdf](https://www.bivica.org/files/plan-desarrollo_Bolivia_2016.pdf)

Muehlebach, Andrea. (2001). "Making place" at the United Nations: indigenous cultural politics at the U. N. Working group on indigenous populations. *Cultural anthropology*, 16 (3), 415-448. <https://doi.org/10.1525/can.2001.16.3.415>

Orozco Ramírez, Shirley; García Linera, Álvaro, y Stefanoni, Pablo. (2006). *No somos juguete de nadie: Análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización*. La Paz: Plural Editores.

Pacheco, Luis; Quispe-Calle, Lineth; Suárez-Guzmán, Fabiola; Ocampo, Mauricio, y Claire-Herrera, Ángel. (2021). Muerte de mamíferos por los incendios de 2019 en la Chiquitania. *Ecología en Bolivia*, 56 (1), 4-16.

*Página Siete*. (3 de enero de 2017). Volver al campo: historias de lucha y reconquista de la tierra. <http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/1/3/volver-campo-historias-lucha-reconquista-tierra-122414.html>

Paz Patiño, Sarela. (24 de julio de 1994). El límite yuracaré. *Facetas datos y análisis*. <http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/etnias/digital/106000425.pdf>

Permanent Forum on Indigenous Issues. (2010). *Indigenous peoples: development with culture and identity, articles 3 and 32 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. E/C.19/2010/14. [U. N. Document]. Naciones Unidas. <https://undocs.org/E/C.19/2010/14>

Praeli, Yvette. (16 de mayo de 2019). Ñembi Guasu: la nueva área de conservación en el Chaco de Bolivia. *Mongabay*. <https://es.mongabay.com/2019/05/bolivia-nembi-guasu-conservacion-chaco-video/>

Programa de Investigación Estratégica en Bolivia. Programa de Investigación Ambiental [PIEB]. (2011). *Viabilidad económica para el desarrollo de iniciativa que reduzcan la deforestación en el TIPNIS*. La Paz: PIEB. <https://www.scribd.com/document/68630238/Investigacion-TIPNIS-PIEB>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2004). *Informe de desarrollo humano en Santa Cruz*. La Paz: Plural editores.

Radcliffe, Sarah. (2012). Development for a postneoliberal era? Sumak Kawsay, living well and the limits to decolonisation in Ecuador. *Geoforum*, 43 (2), 240-249.

Ranta, Eija (2016). Toward a decolonial alternative to development? The emergence and shortcomings of “vivir bien” as bolivian state policy in the era of globalization. *Globalizations*, 13 (4), 425-439.

*Realidad viral* [@realidadviral7199]. (4 de octubre 2019). La oración y la poesía de Andrea Vaca Barbery en el Cabildo [Archivo de video]. <https://www.youtube.com/watch?v=mPoFGgn6QHc>

Scott, James. (2009). *The art of not being governed: an anarchist history of upland southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

Siles, Nelson, y Sanabria, Jerry. (2009). *Spatial modelling and prediction of tropical forest conversion in the Isiboro Sécuré National Park and indigenous territory [TIPNIS], Bolivia*. [Tesis de maestría]. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. [http://www.itc.nl/library/papers\\_2009/msc/nrm/siles.pdf](http://www.itc.nl/library/papers_2009/msc/nrm/siles.pdf)

Subcentral TIPNIS y Campaña en Defensa del TIPNIS. (2010). *Memoria: foro departamental: territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Cochabamba, 23 de septiembre de 2010)*. Cochabamba: CENDA.

Svampa, Maristella. (2015). Commodities consensus: neoextractivism and enclosure of the commons in Latin America. *The south atlantic quarterly*, 114 (1), 65-82. <https://doi.org/10.1215/00382876-2831290>

